

Imprimir

El pasado 6 de febrero, murió Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye; según las noticias, víctima de un cáncer de esófago. Ese mismo día, el comandante del ejército, General Eduardo Enrique Zapateiro sorprendió al país y al mundo, al entregar unas declaraciones donde reitera que como Comandante del ejército colombiano lamenta su fallecimiento y extiende su pésame a la familia del exjefe de sicarios de Pablo Escobar.

Inmediatamente, en las redes sociales se inició una fuerte polémica donde críticos y defensores de la declaración del General Zapateiro expusieron, desde un ángulo que apela a la emocionalidad humana sus argumentos. Sin embargo, el tema merecería un análisis más juicioso y sereno, que permitiera identificar más allá del mismo Jhon Jairo Velásquez ¿qué han significado los “Popeyes” para el país? y ¿qué significa el hecho de que quien comanda una institución armada del Estado lamente su desaparición?

Popeye fue mando en un cartel de drogas, aparentemente derrotado con la muerte de sus “patrones”, pero que en realidad salió victorioso al culminar su objetivo de tomar las instituciones políticas y asegurar así el poder en un país desde el escenario más sólido, el imaginario de sus ciudadanos. Si por algo recordamos a Pablo Escobar fue por iniciar un proceso de toma del Estado desde sus instituciones, apostándole a posicionarse en la estructura política; en ese sentido, fue quizá el primero que mostró interés en combinar las formas del poder (económico, político, militar, etc.) como camino para consolidar su hegemonía. Camino que se pavimentó con los antivalores que han pasado a ser parte de la cultura de los y las colombianas y con el miedo que ha garantizado su reproducción por varias generaciones.

Posterior a su liberación de la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Velásquez fue muy criticado por el desparpajo con el que promovía una cultura delincencial y abusiva hasta que, finalmente, fue nuevamente encarcelado por violar su libertad condicional. Sin embargo, ese comportamiento viene a ser solamente otra expresión de la posición desafiante con la que el narcotráfico permeó otros ámbitos de la delincuencia con los que siempre se han dado traslapes y alianzas, como el del paramilitarismo y el de sus promotores. La expresión “Si y ¿qué?”, que resuena en el oído de los colombianos cada vez que poderosos exponentes de su

clase política o empresarial son acusados de crímenes, masacres, despojos o corrupción.

Con su muerte, John Jairo Velásquez se lleva muchas verdades relacionadas con las conexiones entre mafia y “clase política”. El país presenció con estupor cómo se convirtió en acérrimo enemigo de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc EP; se le vio bastante activo en marchas uribistas en contra de los Acuerdos; se hicieron notorias sus expresiones en redes y en encuentros y almuerzos con turistas internacionales, dado que fue convertido en “atractivo turístico” para que contara historias, mas nunca la responsabilidad hasta los días de su vuelta a la cárcel por motivos de extorsión.

Contrasta la rápida declaración del General Zapateiro frente al deceso de Popeye con la actitud predominante de negación del conflicto armado y con las sucesivas maneras de evadir la responsabilidad estatal en la protección de la vida de los líderes sociales. Estamos ante un gobierno y unas fuerzas armadas que niegan cualquier responsabilidad en el conflicto y lanzan evasivas para poder eludirla con respecto a la necesidad de proteger a los líderes y lideresas sociales.

Por el contrario, el común denominador con respecto al asesinato de líderes y lideresas sociales y frente al movimiento social, ha sido de negación y de estigmatización de los diversos liderazgos. Como se afirma en redes sociales, el pronunciamiento de Zapateiro hiere profundamente la dignidad de las víctimas, en particular, de los jóvenes eliminados y promueve desconfianza acerca de la real disposición y compromiso del Estado para derrotar al narcotráfico. Así, mientras se lamenta y glorifica la desaparición de un sicario, por otro lado, se criminaliza la protesta social.

Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

Foto tomada de: Caracol Radio